



• Carta de Belem Group Statement in the context of COP-19 on Climate Change – Warsaw 2013 •

Despite repeated failures of market solutions proposed in the last 20 years in the context of the UNFCCC negotiations, governments continue to insist on promoting market mechanisms within the global climate regime as a solution to the climate crisis. Negotiations on finance for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) mechanism are moving in this direction, raising serious concerns.

Since its creation in 1992, the objective of the Climate Convention has been to reduce greenhouse gas (GHG) emissions in a way that does not imply in risks to Planet Earth's natural systems. According to the UNFCCC text, the Convention's ultimate goal is the "stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system". This objective has not been met, on the contrary, the only binding legal instrument, the Kyoto Protocol, which set the target of Northern Countries' emissions reduction to an insignificant 5.2% (compared to 1990 levels) over the period 2008-2012, saw an approval of its second commitment period with strong weakness given the withdrawal of countries from the treaty and its established targets.

From the time of the adoption of the Kyoto Protocol, it has been made clear that rather than meeting the objective of the Convention, its focus has been to institutionalize the carbon market within the United Nations and member countries. It is increasingly evident that the creation of the Clean Development Mechanism (CDM) – as one of Kyoto's flexible market mechanisms - and its implementation in developing countries has been multiplying negative local impacts where projects are installed, expanding situations of environmental injustice and human rights violations while not effectively contributing to the reduction of emissions.

After the establishment of REDD mechanisms at COP 15 in Copenhagen, the carbon market has been consolidated as the main bet for ongoing funding proposals for REDD + in the Green Climate Fund. As such, the organizations and social movements that make up the Carta de Belém Group and that struggle for environmental and climate justice, reject REDD+ as a carbon market mechanism that offsets greenhouse gas emissions from developed countries. These organizations understand that the carbon market and REDD+ are false solutions to the climate crisis and go against the need of Northern countries to assume their responsibilities and historical debts with the countries and peoples of the South and to reduce their emissions. It also transfers the focus of discussions from the real causes of current climate change – the burning of fossil fuels - to forests.

At the same time Brazil has been domestically creating legal instruments that are dismantling the national environmental legislation, such as the flexibilization of the Forest Code, the Bill of Law (BL) 195/2011 on REDD + and the BL 792/2007 on payments for environmental services. These are proposal that go beyond the incentive model promoted by public policies for the commodification of biodiversity and common goods as well as strengthening the carbon market at the national level through the creation of carbon (Certified Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation - CREDD) or forest and biodiversity (Environmental Reserve Quotas, adopted in the current Forest Code proposal) securities.

In the context of strengthening national and peoples sovereignty, we also reaffirm the importance of the Amazon Fund provided that it is presented as an initiative aimed at reinforcing and promoting the sovereignty of forest communities, stimulating their local productive systems and excluding any compensatory nature. The fulfillment of these lifestyles and production forms fundamentally requires policies that go beyond market arrangements and mechanisms, such as its prioritization in the public budget.

For these and other reasons the group Carta de Belém concludes by reaffirming its support to the position of the Brazilian Foreign Ministry of not being open to the carbon market for REDD finance, while warning Brazilian negotiators that the construction of a national legal framework as pointed out above can only generate a fait accompli and preclude any bargaining force in international climate negotiations preventing future initiatives capable of protecting the national sovereignty of the State and its people to territories as well as policies that in fact address the climate crisis beyond the market.





Declaración Grupo Carta de Belém frente a la COP 19Cambios Climáticos – Varsovia 2013
Declaração Grupo Carta de Belém frente à COP 19 Mudanças Climáticas – Varsóvia 2013

**NO a los
mecanismos de mercado
como solución para
el enfrentamiento a la crisis
ambiental y climática**

A pesar de los sucesivos fracasos en relación a las soluciones de mercado propuestas en los últimos 20 años en las negociaciones de la UNFCCC, algunos gobiernos continúan insistiendo en promover los mecanismos de mercado dentro del marco regulatorio del clima para la solución de la crisis climática. Las negociaciones sobre financiamiento para el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) viene caminando en esta dirección y esto nos preocupa demasiado.

Desde su creación en 1992, el objetivo de la Convención del Clima es la de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de modo que no implique un riesgo a los sistemas naturales del planeta Tierra. De acuerdo con el texto de la UNFCCC visa “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida una interferencia antrópica peligrosa en el sistema climático”. Este objetivo no logro ser atendido, al contrario, el único instrumento jurídico vinculante, el Protocolo de Kyoto, que definió la disminución de apenas 5,2% de las emisiones de los países del Norte (en relación a los niveles de 1990) para un período hasta 2012, tuvo su segundo período aprobado, pero con fuerte debilidad debido a la salida de algunos países del mismo y de las metas establecidas.

Fue demostrado desde la creación de Kyoto que el enfoque del mismo, en lugar de ser el de atender al objetivo de la Convención, fue el de institucionalizar el mercado de carbono en el ámbito de las Naciones Unidas y en el interior de los países signatarios. Queda cada vez más evidente que la creación del Mecanismo de Desarrollo Limpio – dentro de los mecanismos de flexibilización presentes en Kyoto – y su implementación en los países en desarrollo viene aumentando los impactos negativos locales donde los proyectos son instalados, ampliando situaciones de injusticia ambiental y de violaciones de los derechos humanos y no contribuyen efectivamente para la reducción de las emisiones.

Actualmente, después de la creación del mecanismo de REDD en la COP 15, en Copenhague, el mercado de carbono se consolida como la principal apuesta para las propuestas en curso de la ventana de financiamiento para REDD+ en el Fondo Verde. Las organizaciones y movimientos sociales que integran el Grupo Carta de Belém y que luchan por la justicia ambiental y climática rechazan el REDD+ como mecanismo de mercado de carbono que sirva también para compensar las emisiones de gases de los países desarrollados. Estas organizaciones entienden que el mercado de carbono y el mecanismo de REDD+ son falsas soluciones a la crisis climática y van en contra de la necesidad de los países del Norte de asumir sus responsabilidades y deudas históricas con los países y pueblos del Sur y de reducir sus emisiones, así como transfieren el foco de las discusiones de la quema de combustibles fósiles, verdadero responsable por los cambios climáticos actuales, para los bosques.

Brasil, en el ámbito doméstico, viene creando instrumentos legales que están produciendo el desmonte de la legislación ambiental nacional, con la flexibilización del Código Forestal, con el Proyecto de Ley - PL 195/2011 sobre REDD+ y el Proyecto de Ley - PL 792/2007 de contratos de pagos por servicios ambientales, propuestas que se superponen al modelo de incentivos promovidos por políticas públicas para la comercialización de la biodiversidad y de los bienes comunes, fortaleciendo así el mercado de carbono a nivel nacional por medio de la creación de títulos representativos de stocks de carbono (Certificado de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal – CREDD) o de bosques y de la biodiversidad (Cuota de Reserva Ambiental, contenida en la actual propuesta del Código Forestal).

Además, se reafirma, el fortalecimiento de la soberanía nacional y de los pueblos, la importancia del Fondo Amazonia, desde que este se presente como iniciativa de refuerzo y promoción de la soberanía de las comunidades en los bosques estimulando sus sistemas productivos locales, sin cualquier naturaleza compensatoria. Más allá de los acuerdos y mecanismos de mercado para la realización de estos modos de vida y de producción, es fundamental la defensa de la presencia del presupuesto público.

Por estas y otras razones el grupo Carta de Belém finaliza reafirmando el apoyo a la posición del Itamaraty de no abrir el mercado de carbono para financiamiento de REDD, al mismo tiempo en que llama la atención de los negociadores brasileños que la construcción de un marco legal nacional conforme apuntado anteriormente podrá generar un hecho consumado e imposibilitar cualquier ganancia en las negociaciones internacionales del clima e inviabilizar cualquier iniciativa futura de protección de la soberanía nacional del Estado y de sus pueblos a los territorios, así como de políticas que enfrenten de hecho la crisis climática por fuera del mercado.

**Não aos
mecanismos de mercado
como solução para
o enfrentamento da crise
ambiental e climática**

Apesar dos sucessivos fracassos em relação às soluções de mercado propostas nos últimos 20 anos das negociações da UNFCCC, alguns governos continuam insistindo em promover os mecanismos de mercado dentro do marco regulatório de clima para solução da crise climática. As negociações sobre financiamento para o mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD) vêm caminhando neste sentido e muito nos preocupa.

Desde a sua criação em 1992, o objetivo da Convenção de Clima é a de reduzir as emissões de gases de efeito estufa de modo que não se implique em risco aos sistemas naturais do planeta Terra. De acordo com o texto da UNFCCC visa “a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático”. Este objetivo não conseguiu ser atendido, ao contrário, o único instrumento jurídico vinculante, o Protocolo de Kyoto, que definiu o corte ínfimo de apenas 5,2% das emissões dos países do Norte (em relação aos níveis de 1990) para um período até 2012, teve seu segundo período aprovado, mas com forte debilidade devido à saída de alguns países do mesmo e das metas estabelecidas.

Foi demonstrado desde a criação de Kyoto que o foco do mesmo, ao invés de ser o de atender ao objetivo da Convenção, foi de institucionalizar o mercado de carbono no âmbito das Nações Unidas e no interior dos países signatários. Fica cada vez mais evidente que a criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – dentro dos mecanismos de flexibilidade presentes em Kyoto – e sua implementação nos países em desenvolvimento vêm aumentando os impactos locais negativos onde os projetos são instalados, ampliando situações de injustiça ambiental e de violações dos direitos humanos e não contribuem efetivamente para a redução de emissões.

Atualmente, após a criação do mecanismo de REDD na COP 15, em Copenhague, o mercado de carbono se consolida como principal aposta para propostas em curso da janela de financiamento para REDD+ no Fundo Verde. As organizações e movimentos sociais que compõem o Grupo Carta de Belém e que lutam pela justiça ambiental e climática rechaçam o REDD+ como mecanismo de mercado de carbono que sirva também para compensar as emissões de gases dos países desenvolvidos. Estas organizações entendem que o mercado de carbono e o mecanismo de REDD+ são falsas soluções à crise climática e vão contra a necessidade dos países do Norte de assumirem suas responsabilidades e dívidas históricas com os países e povos do Sul e de reduzirem suas emissões, bem como transferem o foco das discussões da queima de combustíveis fósseis, verdadeiras responsáveis pelas mudanças climáticas atuais, para as florestas.

O Brasil, no âmbito doméstico, vem criando instrumentos legais que estão produzindo o desmonte da legislação ambiental nacional, com a flexibilização do Código Florestal, com o PL 195/2011 sobre REDD+ e o PL 792/2007 de contratos de pagamentos por serviços ambientais, propostas que ultrapassam o modelo de incentivos promovidos por políticas públicas para a comercialização da biodiversidade e dos bens comuns, bem como fortalecendo o mercado de carbono a nível nacional por meio da criação de títulos representativos de estoques de carbono (Certificado de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal – CREDD) ou de florestas e da biodiversidade (Cota de Reserva Ambiental, contida na atual proposta do Código Florestal).

Ademais, reafirma-se, em fortalecimento da soberania nacional e dos povos, a importância do Fundo Amazônia, desde que este se apresente como iniciativa de reforço e promoção da soberania de comunidades na floresta estimulando seus sistemas produtivos locais, sem qualquer natureza compensatória. Para além dos arranjos e mecanismos de mercado para realização desses modos de vida e produzir, é fundamental a defesa da presença do orçamento público.

Por estes e outros motivos o grupo Carta de Belém finaliza reafirmando o apoio à posição do Itamaraty de não abrir o mercado de carbono para financiamiento de REDD, ao mesmo tempo em que alerta os negociadores brasileiros que a construção de um marco legal nacional conforme apontado anteriormente poderá gerar um fato consumado e impossibilitar qualquer barganha nas negociações internacionais de clima e inviabilizar qualquer iniciativa futura de proteção da soberania nacional do Estado e de seus povos aos territórios, bem como de políticas que enfrentem de fato a crise climática por fora do mercado.

Signatories:

Friends of the Earth Brazil; National Articulation on Agroecology (ANA) - Amazon; Missionary Council for Indigenous Peoples (Cimi); Environmental Commission – Unified Workers’ Union (CUT); Eastern Amazon Forum (FAOR); Federation of Agencies for Social and Educational Assistance (FASE); Federation of Family Farm Workers - Brazil (Fetraf); Climate Change and Social Justice Forum; Institute for Socioeconomic Studies (Inesc); Peasant Women’s Movement (MMC); Small Farmers Movement (MPA); Landless Peasant Movement (MST); Brazil Network on Multilateral Financial Institutions (Rede Brasil); Terra de Direitos and Via Campesina Brazil.

Firmam/Assinam:

Amigos da Terra Brasil; ANA Amazônia – Articulação Nacional de Agroecologia; CIMI – Conselho Indigenista Missionário; Comissão de Meio Ambiente/CUT - Central Única dos Trabalhadores; FAOR – Fórum da Amazônia Oriental; FASE; Fetraf Brasil – Federação dos Trabalhadores/as da Agricultura Familiar; Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social; INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos; MMC – Movimento de Mulheres Camponesas; MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores; MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais; Terra de Direitos e Via Campesina Brasil.

